ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 3 DE JUNIO DE 2013

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

1

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
2809/2012	AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN promovido en contra de la sentencia dictada el 10 de enero de 2012 por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. (BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO)	3 A 45 EN LISTA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 3 DE JUNIO DE 2013.

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

JUAN N. SILVA MEZA

SEÑORES MINISTROS:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ
OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:40 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión pública ordinaria correspondiente al día de hoy. Señor secretario sírvase dar cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 56 ordinaria, celebrada el jueves treinta de mayo del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señoras y señores Ministros está a su consideración el acta con la que se ha dado cuenta. Si no hay alguna observación, consulto si se aprueba en forma

económica. **(VOTACIÓN FAVORABLE). ESTÁ APROBADA
SEÑOR SECRETARIO.**

Continuamos.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo al

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2809/2012. PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EL 10 DE ENERO DE 2012 POR LA CUARTA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Bajo la ponencia del señor Ministro Pardo Rebolledo, y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN, COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA.

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES Y POR LOS ACTOS QUE QUEDARON PRECISADOS EN EL RESULTANDO PRIMERO DE ESTA EJECUTORIA.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Tiene la palabra el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por favor.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Muchas gracias señor Presidente. Señoras y señores Ministros, en el presente asunto se trata de un recurso de revisión en amparo directo interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado de Michoacán, y en el recurso, el quejoso planteó dentro de sus conceptos de violación; es decir, en el amparo directo, la existencia de una interpretación directa del

artículo 20, fracción IX, de la Constitución Federal, en lo relativo a la adecuada defensa.

Al tratarse de un problema constitucional que entraña la posible fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia en virtud de los alcances respecto a la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, se exponen brevemente los antecedentes y consideraciones que se sometieron en su momento para el conocimiento de la Primera Sala antes de que fuera retirado para ser elevado a este Honorable Pleno.

Se trata de un recurso de revisión en materia penal en donde el quejoso fue encontrado responsable del delito de robo calificado y homicidio también calificado; los hechos delictivos sucedieron el veintitrés de mayo de dos mil nueve en Apatzingán, Michoacán, fecha y lugar en donde todavía no había sido instaurado oficialmente el sistema procesal penal acusatorio; los antecedentes consisten en que el quejoso y otra persona estaban ingiriendo bebidas embriagantes, posteriormente decidieron abordar un taxi, en el trayecto amagaron al conductor y ante sus evasivas de darles dinero, lo bajaron del taxi, le robaron y lo privaron de la vida; como resultado de las investigaciones de las autoridades se logró detener a los responsables e iniciarles procedimiento penal; seguidos los trámites correspondientes, el juez competente consideró al quejoso y a su coinculpado responsables de los delitos de robo y homicidio calificado; inconformes con tal fallo interpusieron recurso de apelación, el que la Sala Penal de Michoacán consideró apegado a derecho y confirmó la sentencia recurrida; así pues, el quejoso promovió amparo directo, fallo en el que el Tribunal Colegiado determinó negarles la protección constitucional, y es precisamente en contra de esta sentencia que se promueve el recurso de revisión que es de nuestro conocimiento.

De inicio, no sé si quisiera, señor Presidente, abordar primero los temas formales. En el proyecto se propone que desde luego el recurso fue interpuesto en tiempo, que la persona que lo hizo valer está legitimada para hacerlo y que es procedente la revisión en amparo directo porque la sentencia del Tribunal Colegiado recurrida sí contiene una interpretación directa del artículo 20, fracción IX, de la Constitución. No sé si quisiera señor Presidente, hasta ahí dejaría mi intervención en este momento.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro ponente. Bien, como ha señalado el propio señor Ministro Pardo Rebolledo, pondríamos a su consideración los temas procesales: La competencia, la oportunidad en los Considerandos Primero y Segundo; en el Tercero, la problemática jurídica a resolver en cuanto a la propuesta que hace el propio proyecto; el Considerando Cuarto, relativo a la procedencia del recurso; y el Considerando Quinto, las que determina el proyecto como cuestiones necesarias para resolver el asunto.

¿Hay alguna consideración en relación con alguno de estos temas? Si no es así, les consulto si se aprueban en forma definitiva de manera económica **(VOTACIÓN FAVORABLE). ESTÁN APROBADOS.**

Señor secretario tomamos nota. Señor Ministro ponente regresaríamos a su participación como presentación en el Considerando Sexto, el estudio de fondo.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Sí, cómo no señor Presidente. Ya en el estudio de fondo, el recurrente afirma que el Tribunal Colegiado realizó una interpretación directa del artículo 20, fracción IX, de la Constitución Federal, pues al momento en que rindió su declaración ministerial y en ella admitió su participación en

los hechos delictivos atribuidos, señaló como persona de su confianza a su padre, persona que no tiene conocimiento en leyes, violando así su garantía de defensa adecuada.

Al respecto, en el proyecto se establece que el artículo 20, fracción IX constitucional, fue modificado con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho que instaura el sistema procesal penal acusatorio; la diferencia entre la porción normativa antes de la reforma de dos mil ocho y la posterior, es que el precepto antes de la reforma refiere que el derecho a la defensa adecuada puede satisfacerse por medio de un abogado o persona de confianza y a falta de estos, se le nombrará un defensor de oficio; mientras que el artículo ya reformado y que está en un período de *vacatio legis* por ocho años a partir de dos mil ocho, determina la figura de la defensa técnica profesional en el sistema procesal penal acusatorio al referir que la defensa adecuada se deberá llevar a cabo por medio de un abogado y a falta de dicha designación a través de un defensor de oficio.

El artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional estableció que el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, todos de la Constitución Federal, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente sin exceder del plazo de ocho años, además se impone la obligación a la Federación, a los Estados y al Distrito Federal, de expedir los ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio y juicios orales, y faculta a las mismas autoridades, a que cuando lo implementen puedan imprimirle ciertas modalidades relativas a su aplicación por regiones o por tipo de delito.

De tal manera que si la Legislatura del Estado de Michoacán no ha emitido la declaratoria correspondiente de implementación del sistema procesal penal acusatorio, todavía no tienen aplicación en su territorio las citadas reformas constitucionales, especialmente la parte que corresponde al tema de la defensa técnica o profesional adecuada por un profesional en derecho, pues la condicionante establecida para su vigencia no ha sido superada y por tanto, contrario a lo argumentado por el inconforme, no puede aplicarse en su favor, considerando de esta forma correcta la apreciación del Tribunal Colegiado.

De autos se advierte que la declaración ministerial del hoy quejoso y recurrente, se fundamentó en el artículo 329, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán y tal ordenamiento coincide con los principios rectores del artículo 20, Apartado A), fracción IX, vigente antes de las reformas operadas a ese numeral el dieciocho de junio de dos mil ocho y que es el aplicable, porque la disposición reformada existente sobre el tema contenida en el Apartado B), fracción VIII, relativa a que si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público es aplicable hasta que entre en vigor el proceso penal acusatorio, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa toda vez que los hechos delictuosos atribuidos al ahora recurrente tuvieron lugar el veintitrés de mayo de dos mil nueve y éste fue juzgado aplicando la legislación procesal penal local vigente, concordante con la disposición constitucional anterior a la reforma de que se habla.

Por tanto se propone a las señoras y señores Ministros determinar que en el presente caso no se vulneró la garantía de defensa adecuada toda vez que el hoy recurrente ejerció su derecho de designar a una persona de confianza tal como lo permite el texto constitucional, que no existió irregularidad alguna en el desahogo

de esa diligencia, que no hubo resistencia para ejercer dicha prerrogativa, ni tampoco que se le hubiese restringido o impedido ejercerla por parte de las autoridades ministeriales.

En relación con los diversos agravios que se hacen valer, se considera que se refieren a aspectos de mera legalidad y por lo tanto se califican de inoperantes para el efecto de este recurso de revisión en amparo directo.

Esa sería señoras Ministras, señores Ministros, señor Presidente, en términos muy concretos la propuesta del proyecto. Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro ponente. Antes de dar la palabra al señor Ministro Cossío, que la ha solicitado, tal vez sea conveniente hacer referencia precisamente en relación con esta última observación que hace el señor Ministro ponente, respecto del tratamiento del proyecto; aborda efectivamente lo que es la materia de este recurso extraordinario, competencia de este Tribunal Pleno a la revisión en el amparo directo, la interpretación directa del artículo 20, fracción IX, de la Constitución Federal, y como él bien lo señala, los otros agravios que son de legalidad, son considerados inoperantes en el recurso.

Vamos a centrar la discusión en el artículo de fondo, precisamente al tema que nos atañe de manera esencial que es precisamente al que se ha hecho referencia por el señor Ministro. Señor Ministro Cossío, tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. Yo quiero manifestar que estoy en desacuerdo con el proyecto. El Sexto Considerando empieza en la página treinta y cinco y más o menos hasta las páginas cuarenta y seis y cuarenta y siete trata este tema de constitucionalidad. Después, como usted lo decía señor Presidente y también el Ministro ponente entra el tema de

legalidad y me parece muy razonable que no analicemos este tema por las razones que se dan en el propio proyecto y que usted acaba de expresar hace un momento.

La razón del desacuerdo que tengo es la siguiente: El Ministro Pardo en su presentación, me parece que con toda claridad nos señalaba el tema del régimen transitorio al que está sujeta la reforma de junio de dos mil ocho, y esas razones son básicamente que hasta junio del dos mil dieciséis tendrá que establecerse en todo el país un sistema nacional y que para entonces deberá estar en vigor, y que con anterioridad a este momento podrán los Estados tener el sistema penal acusatorio siempre y cuando hubieren hecho una declaración. Como muy bien se sustenta en el proyecto, en la página cuarenta y dos, el Estado de Michoacán no ha hecho esta declaración, consecuentemente el sistema penal acusatorio no ha entrado en vigor de manera integral en esa entidad federativa, y dado que no hemos llegado a junio del dieciséis, aun cuando cada vez falta menos tiempo para ello, tampoco me parece que ha entrado, se ha actualizado la vigencia de la reforma constitucional.

Sin embargo, el hecho de que no haya entrado en vigor esta reforma, no me parece una razón suficiente para dejar de atender el planteamiento del propio quejoso, ya no contra lo que dispone el artículo 20 constitucional, sino con lo que dispone el artículo 8º, párrafo segundo, inciso e) de la Convención Americana que en un momento voy a referir.

¿Y por qué razón me parece que esta es la manera –desde mi punto de vista y como siempre, con gran respeto a la opinión de los demás– correcta de analizar el problema? Porque al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007, votada por mayoría de nueve votos, dijimos lo siguiente, me voy a permitir leer unos pequeños fragmentos de esa decisión, de la acción de inconstitucionalidad, porque me parecen sumamente relevantes

para el caso actual, dice: “Lo anterior, la reforma al artículo 1°, junto con el parámetro de constitucionalidad establecido en el Expediente Varios 912/2010, implica la existencia de un objetivo constitucional, favorecer en todo momento la protección más amplia de los derechos humanos; a fin de cumplir este objetivo en cada uno de los casos que se les presente en el ámbito de sus competencias, tanto los juzgadores como las demás autoridades del Estado mexicano, deberán elegir si son los derechos humanos de fuente constitucional, así como sus interpretaciones o los derechos humanos de fuente internacional los que resultan más favorables; es decir, de las opciones normativas posibles, nacionales o internacionales, las autoridades deberán elegir y preferir las que resulten una protección más amplia de la persona. En este sentido, es claro que no es procedente establecer un criterio jerárquico entre los diversos instrumentos normativos que integran el parámetro de regularidad constitucional que han sido descritos; lo procedente es que los jueces del Estado mexicano, al interpretar el contenido de un determinado derecho humano, elijan el que resulte más favorable para los individuos entre los contenidos en la fuente constitucional o aquéllos que se deriven de fuente internacional.

Consecuentemente, corresponde a los jueces, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales la realización de un ejercicio de valoración derivado del mandato contenido en la parte final del segundo párrafo del nuevo artículo 1° constitucional, para la elección del estándar normativo que integrará el parámetro de regularidad constitucional a aplicar en cada caso concreto, buscando siempre el objetivo constitucional, aplicar el que resulte en el mayor beneficio de las personas.

A partir de esta obligación genérica de todos los jueces del Estado mexicano, ya en el ámbito de sus atribuciones, tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, esta Suprema Corte no debe limitarse al texto constitucional sino que también debe tomar en

cuenta lo establecido en los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano aun cuando no hayan sido invocados.

Así, la integración del parámetro de control de constitucionalidad en cada caso concreto para el posterior ejercicio de valoración derivado del mandato contenido en la parte final del segundo párrafo del nuevo artículo 1º constitucional, realizado por este Tribunal, debe incluir de forma oficiosa los estándares derivados de las disposiciones internacionales que establezcan derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Como les decía, este precedente tuvo una votación mayoritaria de nueve de sus integrantes, entre los cuales me incluyo. Si esto es así, y esto es lo que resolvimos, la Convención Americana –insisto– en su artículo 8º, relativo a las garantías jurisdiccionales, tiene un punto 2 que dice: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad; durante el proceso toda persona tiene derecho –en plena igualdad– a las siguientes garantías mínimas”.

Y el inciso e) dice lo siguiente, y cito: “Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna; si el inculcado no se defendiera por sí mismo, ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.

Yo sé que la manera en la que en el Expediente Varios 912, determinamos mayoritariamente, o se determinó mayoritariamente, el estatus de las decisiones dictadas por la Corte Interamericana respecto de asuntos en los que el Estado mexicano no sea parte; es decir, las sentencias que nos condenaron como Estado nacional son de carácter orientador, pero me parece muy importante aun en ese carácter orientador, entender la manera en la cual se ha establecido el derecho a la defensa técnica, oportuna en diversos

casos, cito algunos de ellos, nada más por nombre, no creo que tenga mayor caso abrumarlos aquí con esta información.

El Caso Barreto Leyva contra Venezuela, la sentencia fue el diecisiete de noviembre de dos mil nueve; el Caso Cabrera García y Montiel Flores contra el Estado mexicano, del veintiséis de noviembre de dos mil diez; el Caso Tiby contra Ecuador, del siete de septiembre de dos mil cuatro; el Caso López Álvarez contra Honduras, del primero febrero de dos mil seis, y el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, del veintiuno de noviembre de dos mil siete.

Creo que si nosotros entonces ponemos en conjunción estos distintos elementos; en primer lugar, el hecho de que nuestra Constitución efectivamente tenga un mejor sistema de protección, una defensa técnica, pero ésta no ha entrado en vigor, como bien dice el proyecto, pero por otro lado, hacemos caso a lo que resolvimos en este precedente de la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007, por otra parte, tendríamos nosotros que llevar a cabo una interpretación preferencial respecto de la protección más amplia que está otorgada por el artículo 8º, numeral 2, inciso e), de la Convención Americana.

Esto ya lo hicimos, recordarán ustedes con este asunto donde unas personas que estaban internadas en Zacatecas en unos penales fueron llevadas a Orizaba, Veracruz, y nosotros ordenamos que se les regresara a Zacatecas para el efecto de que pudieran compurgar sus prisiones cerca de su domicilio, a efecto de lograr la reinserción como lo postuló el Constituyente. En ese caso, teniendo nosotros un artículo 18 constitucional, y teniendo los preceptos del sistema interamericano, nos pareció más adecuado y creo que es así, el que el artículo 18 de la Constitución protegía de mejor manera, cabalmente pues esta condición y lo restablecimos.

También tuvimos el caso del trabajo forzado, en el Estado, me parece que de Yucatán, y allí lo que establecimos es que era más protector el Convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo respecto de lo que disponía el artículo 21, de la Constitución, y consecuentemente aplicamos este Convenio 129.

En el caso concreto, a mí me parece que resulta mucho más protector la defensa técnica, en el caso del artículo 8.2, inciso e) de la Convención, que respecto de lo que postula nuestra Constitución, en la parte en que está en vigor, no en la que desde luego no ha entrado en vigor, y por ende, estoy en contra del proyecto señor Presidente. Desde luego no me pronuncio sobre los efectos, porque creo que este no es el momento, aun cuando más adelante me parece que no tenemos más remedio que pronunciarnos sobre el tema y me reservaría mi opinión para ese caso. Muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossío. Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente. Antes de pronunciarme sobre el sentido del proyecto, creo conveniente, primero, exponer a partir de la litis de este asunto, algunas ideas en torno a la defensa adecuada, y para ello voy a fijar mi atención en la estructura normativa existente antes de la reforma constitucional de junio de 2008, que estableció el sistema penal acusatorio y en la estructura misma de la propia reforma constitucional. La fracción IX, del Apartado A, del artículo 20 de la Constitución, reformada el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, estableció que: “Desde el inicio de su proceso será informado –desde luego, el detenido– de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuado, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere, o no puede nombrar defensor, después de

haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”. Por su parte, el propio artículo 20 constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Apartado B, fracción VIII, dispone que: “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”. En el propio Decreto por el que se reformó y adicionó entre otros el precepto constitucional relativo, se estableció en el Transitorio Primero, que dicho Decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los dos Transitorios siguientes: En el Segundo Transitorio se prescribe que el sistema procesal penal acusatorio previsto entre otros preceptos, en el artículo 20 de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, constados a partir del día siguiente de la publicación de ese Decreto. Por su parte, el Transitorio Cuarto, señaló que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, todos de la Constitución Federal, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Una vez transcritas estas disposiciones constitucionales, y dado lo que se decretó “Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” Surgen

para mí las siguientes interrogantes ¿Qué parte del Decreto como dice uno de los Transitorios, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación? Y ¿Qué fue lo que no entró en vigor inmediatamente?, ¿Qué disposiciones constitucionales de las reformadas conforman propiamente el sistema penal acusatorio que pretendió establecer el Poder reformador de la Constitución? y ¿Qué otras disposiciones atendiendo a su contenido estaban ya vigentes? Indudablemente que la respuesta a las mencionadas interrogantes nos dará la pauta para saber si la disposición constitucional relativa a la defensa adecuada entró en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto de reforma constitucional mencionado o no. Evidentemente que la comparación de los diversos supuestos normativos, unos los contenidos en la fracción IX, del artículo 20 constitucional, reformada, como ya lo dije, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 3 de septiembre de mil novecientos noventa y tres, con los otros que contempla la fracción VIII, Apartado B, del mismo numeral constitucional, correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, nos da como resultado que el derecho a una defensa adecuada no es una institución novedosa, una regla privativa del sistema procesal penal acusatorio, y por lo mismo, ingrediente esencial y exclusivo del referido sistema.

Lo anterior lo considero así, pues si analizamos el contenido de la citada reforma constitucional, concluiremos que ésta únicamente comprendió uno de los aspectos de la configuración normativa de los supuestos de la defensa adecuada, dado que los otros quedaron intocados, destacando sólo que la defensa adecuada no puede cumplir su objetivo cuando puede ser llevada a cabo por un abogado, y no por persona digna de confianza del indiciado, procesado o sentenciado, que no sea abogado.

En efecto, sólo un profesional del derecho tiene la capacidad y la formación técnica para orientar a la persona detenida o sujeta a proceso, sobre el contenido y alcance de los diversos actos procesales que concatenadamente se desarrollan, hasta llegar a la sentencia, sobre el ofrecimiento y desahogo de las pruebas de cargo existentes en la causa, sobre la existencia de excluyentes de responsabilidad penal, sobre las eximentes de pena, sobre los diversos medios de impugnación que legal y constitucionalmente se establecen para que los pueda hacer valer, sobre la existencia, encuadramiento y calificación jurídica de los hechos imputados, así como sobre la correcta o incorrecta valoración judicial en la sentencia de los distintos medios de convicción desahogados, etcétera, etcétera.

Con la reforma quedó definitivamente conformado el derecho que tiene toda persona detenida o que pueda ser acusada de una infracción penal, antes, durante y después del juicio, a contar con la asistencia jurídica, experimentada, competente, eficaz y diligente de un abogado, elegido libremente o designado por el Estado, pero gratuitamente, en los supuestos relativos a fin de que proteja sus derechos y la ayude a defenderse.

Así, dada la nueva configuración en uno de los aspectos de la defensa adecuada, atinente a la posibilidad de elegir libremente como defensor a uno que sea profesional del derecho, manteniéndose incólumes los demás aspectos que también constituían el contenido del derecho fundamental de adecuada defensa, yo me pregunto si puede aplicarse una reforma aprobada con posterioridad a los hechos, indudablemente que la respuesta no podría ser negativa, por efectuarse en beneficio del procesado, requiriéndose únicamente para tal efecto, que la disposición se encuentre vigente; lo cual, como he señalado, ocurrió a partir del día siguiente a la publicación de la reforma constitucional de

dieciocho de junio de dos mil ocho, en términos del Primero Transitorio del Decreto respectivo, al no ser necesaria la instrumentación de medidas relacionadas con esto, con la defensa adecuada, con motivo de la adopción del nuevo sistema penal acusatorio.

Por las razones anteriores, señor Presidente, señoras Ministras, señores Ministros, no comparto el sentido del proyecto que considera infundado el agravio del quejoso, relativo a que el Colegiado realizó una incorrecta interpretación del artículo 20, fracción IX, de la Constitución, y mi voto será porque se conceda el amparo, para el efecto de que se revoque la sentencia y se dicte otra, en plenitud de jurisdicción, en la que no se tome en cuenta la diligencia o declaración ministerial rendida, sin la presencia de un profesional del derecho. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Valls. Señora Ministra Sánchez Cordero.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Gracias señor Ministro Presidente. Yo como los señores Ministros que me antecedieron en el uso de la palabra, y respetuosamente, tampoco comparto las consideraciones formuladas al realizar el estudio del agravio del que el quejoso se duele, precisamente, la interpretación realizada al artículo 20 constitucional, en lo relativo a la defensa adecuada, con la finalidad de expresar estas razones con mayor claridad, si me permiten tomarme algunos minutos explicaré el por qué de mi disentimiento, en el mismo orden en que están estructuradas en el propio proyecto.

La primera es la vigencia del artículo a la luz de la reforma del año dos mil ocho, primero me referiré al tema de la vigencia del artículo

20, conforme a la reforma constitucional del dieciocho de junio de dos mil ocho, y en segundo lugar me referiré al contenido del derecho a una defensa adecuada, conforme a la redacción del propio precepto constitucional, pero antes de la aludida reforma, pues es precisamente esta interpretación la que se propone en el amparo directo en revisión que se encuentra listado bajo mi ponencia, inmediatamente después del presente asunto.

La reforma constitucional que instauró el sistema penal acusatorio en el ordenamiento jurídico mexicano, constituye un cambio adjetivo y sustantivo al sistema penal mexicano, el contenido de ésta supone modificaciones institucionales y el reconocimiento explícito de ciertos derechos, dichos cambios requieren de tiempo para que pueda ser implementado en su totalidad; por ello, el Poder reformador de la Constitución otorgó un plazo de ocho años a las autoridades, para que pudieran realizarse los ajustes necesarios para implementar el sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20, 21, párrafo séptimo de nuestra Constitución; sin embargo, de dicho Decreto, no sólo se realizaron modificaciones procesales sino que se reconocieron explícitamente derechos fundamentales para la protección del gobernado, las porciones del texto constitucional reformado en las que se reconocen derechos fundamentales conforme al artículo Primero Transitorio del Decreto, entraron en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto, contrario a lo dispuesto en la sentencia, el estudio de la vigencia del artículo 20 constitucional reformado, no puede realizarse en bloque, sino que es necesario distinguir las prescripciones relativas al sistema procesal de las porciones normativas del texto en las que se reconocen derechos fundamentales, una interpretación en contrario, supondría la restricción indebida de un derecho fundamental, con base en un plazo o en el que el Legislador no emitió la legislación secundaria

en la materia, contrariando –desde nuestra óptica– el contenido del artículo 1º constitucional.

El artículo 20 en su apartado B, fracción VIII de la Constitución, vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho establece, en esta fracción que está a nuestra consideración y a nuestra interpretación:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada: Fracción VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.”

De la simple lectura del texto del artículo, se desprende que el contenido de la fracción refiere explícitamente al reconocimiento del derecho fundamental a una defensa adecuada, la interpretación que suspende el reconocimiento de este derecho –en nuestra óptica– atenta contra la protección de los derechos fundamentales, lo que significaría ir en contra de nuestro mandato constitucional.

Las reformas en materia de derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad con el texto vigente del artículo 1º. El orden jurídico mexicano cuenta con una protección mayor en relación con los derechos fundamentales, esto implica que los valores, principios y derechos que materializa nuestra Constitución, deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación, y en aquellos casos en que sea

procedente, a su interpretación, y por tanto las reformas en materia de derechos fundamentales no pueden considerarse sujetos a una condición de término.

Este derecho constituye un elemento esencial del acceso a la impartición de justicia en un sentido amplio, en tanto que la intervención activa de un defensor técnico posibilita que todos los derechos y garantías en materia penal reconocidos a favor del gobernado, no sólo sean resguardados, sino efectivamente ejercitados. El derecho del acusado a contar con una defensa adecuada, tanto en la fase de detención, como en la del juicio penal es un derecho instrumental dirigido a garantizar que la sanción más severa que pueda imponer el Estado que es la pérdida de la libertad personal, sea a través de un debido proceso. El derecho a contar con un abogado en la fase de detención, es un mecanismo para garantizar al detenido el ejercicio de sus demás derechos constitucionales: El derecho a guardar silencio, el derecho a no ser incomunicado ni torturado, el derecho a no ser sometido a una detención arbitraria, el derecho a ser informado de las razones de su detención, entre muchos otros.

Es la intervención del abogado defensor, la que en último término puede impedir a través del ejercicio de los recursos legales conducentes, que estos derechos constitucionales del detenido se violen por las autoridades o bien que sus violaciones tengan consecuencias jurídicas en el proceso. La eficacia de la defensa técnica que pueda brindar un abogado depende de la posibilidad de comunicación que tengan defensor y defendido.

En este sentido, la posibilidad de entrevistarse, previo a que se rinda la primera declaración, garantiza la posibilidad material de dar cumplimiento al contenido del derecho pues permite que el

defensor pueda allegarse de los elementos que requerirá para estructurar la defensa de su representado.

En este sentido, la autoridad tiene la obligación, en primer lugar, de informar al detenido de los derechos que le asisten, incluido el derecho a una defensa adecuada, proporcionada por un abogado con quien pueda reunirse; en segundo lugar, la autoridad también tiene la obligación de posibilitar que defensor y defendido puedan entrevistarse.

Lo anterior, por lo que respecta a la vigencia del artículo 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución, que a mi juicio, por contener un derecho fundamental, cobró vigencia para todo procesado a partir del dieciocho de junio del dos mil ocho, con independencia de que se haya emitido o no la declaratoria de instauración del proceso penal acusatorio y oral.

El segundo tema que está poniendo a nuestra consideración el proyecto, es el análisis del precepto constitucional antes de la reforma. Desde mi óptica personal, es necesario establecer que la materia de constitucionalidad en esta instancia, consiste en determinar si se viola o no la garantía de defensa adecuada cuando se permite que una persona asista a un indiciado en una diligencia sin acreditar legalmente su condición de abogado.

Es importante destacar que los hechos acontecieron en el año dos mil diez; sin embargo, al no haberse instaurado en el Estado de Michoacán el sistema penal acusatorio en el proyecto que hoy se nos presente y que se somete a nuestra consideración, se sostiene que el proceso penal se inició al tenor del artículo 20, fracción IX constitucional, vigente antes de la reforma constitucional del dieciocho de junio del año dos mil ocho y que es del tenor literal siguiente: “Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el

inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías:
A. Del inculpado. Fracción IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio.

También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”. (Fin de la cita del precepto constitucional vigente anterior a la reforma).

La redacción de este referido precepto constitucional, en lo relativo al derecho fundamental que el quejoso recurrente estimó violado, contempla tres posibilidades de defensa: La efectuada por el propio procesado, por un abogado o por persona de su confianza, lo que conduce a establecer que será otorgada la libertad al imputado de elegir —a su juicio— quién deberá ser su asesor durante el proceso; llegando, incluso a contemplar la posibilidad de que sea él mismo, es pues el abogado sólo una de las tres posibilidades de nombramiento; es de señalar que la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar el análisis de la garantía de defensa adecuada en relación con la asistencia que debe otorgarse a todo inculpado, concluyó que dicha garantía consiste en dar oportunidad a todo inculpado de que tenga un defensor, y éste a su vez tenga la oportunidad de aportar pruebas, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho y utilizar los beneficios procesales que la legislación correspondiente establezca para la defensa.

En atención a estas características, la Primera Sala arribó al criterio de que la asistencia legal que debe proporcionar el defensor, al

cual se refiere la Constitución, y que se encuentra estrechamente relacionado con la garantía de defensa adecuada, no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor, sino que debe interpretarse en el sentido de que exista una efectiva ayuda del asesor legal.

Por todo lo anterior, y acorde con el criterio sustentado por la Primera Sala, considero que cuando un indiciado, durante el desarrollo del proceso al que está sujeto no cuenta con asesoría de un profesional del derecho, esto es, por una persona con capacidad en la materia que pudiera defender con conocimiento jurídico y suficiente sus intereses a fin de que su garantía de seguridad jurídica en el procedimiento penal se viera respetada, no se cumple con el derecho fundamental a tener una defensa eficaz, toda vez que el juzgador debe procurar que el abogado designado por el procesado con el carácter de defensor particular, acredite ser licenciado en derecho con título profesional correspondiente, a fin de garantizar la protección del derecho de defensa adecuada, y al no hacerlo, éste se viola irremediablemente.

Ello es así, pues ciertas afectaciones del derecho a la defensa no pueden resolverse como si se tratara de un mero trámite o cuestión procesal, sino como la vulneración del contenido esencial de un derecho fundamental, como la transgresión de un elemento de validez del proceso que debe, por tanto, ser reparada a cabalidad estableciendo una consecuencia a su incumplimiento.

Las anteriores consideraciones —como ya nos recordaba el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz— resultan acordes con lo previsto en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 8. Garantías Judiciales. Punto 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: –y como nos recordara el inciso e)– derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.

En ese sentido, se debe apreciar que la solución adecuada descansa en respetar, en primer término, el principio pro persona que establece que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre; es decir, que debe acudirse a la interpretación extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, tratando de resolver este asunto de la manera que más favorezca al quejoso recurrente, atendiendo al sistema garantista que pretendió establecer el Poder reformador de la Constitución.

De igual modo, conviene sustentar esta solución en una interpretación constitucional que sea acorde con los contenidos de los tratados de derechos humanos aplicables, armonizando esa solución con los compromisos internacionales del Estado mexicano.

En ese sentido, se considera que los efectos restitutorios de este juicio, bueno, ya me adelantaría yo a los efectos, quisiera señor Ministro Presidente, dejarlos para la posterior discusión, solamente me resta manifestar que no estaría de acuerdo con el proyecto en esta interpretación. Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señora Ministra Sánchez Cordero. Señor Ministro Arturo Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente. Este tema sin duda es un tema complejo, opinable, en

la Sala hemos tenido votaciones divididas muy ajustadas. Por mi parte, de manera reiterada he votado en contra del criterio que se sostiene en el proyecto, y así lo haré en esta ocasión. Los argumentos que sostienen mi postura los he expresado en diversas ocasiones en la Primera Sala, y ya han sido manifestados casi en su totalidad por la señora y señores Ministros que me antecedieron en el uso de la palabra; sin embargo, voy de manera breve, simplemente a puntualizarlos.

En primer lugar, me parece que el tema que se está debatiendo no es si entró en vigor o no entró en vigor la reforma al artículo 20 constitucional, y creo que incluso no es ese el alegato del quejoso y del recurrente, sino una interpretación distinta del artículo 20 vigente en el momento en que se llevaron a cabo estos hechos. Creo que efectivamente el recurso es fundado, y que debe entenderse que la defensa adecuada implica una defensa técnica con el texto vigente antes de la reforma para establecer el sistema penal acusatorio.

En primer lugar, comparto lo que ya decía el Ministro Valls, en el sentido de que la defensa técnica a través de un especialista en derecho no es exclusivo de un sistema u otro, cualquier sistema penal: el inquisitorio, el acusatorio, los sistemas mixtos, requieren necesariamente el establecimiento de la defensa adecuada del debido proceso, y yo no entiendo que se pueda dar una defensa adecuada cuando ésta se lleva a cabo por alguien que aunque tenga la confianza del procesado, del indiciado, dependiendo de la etapa, no sea un experto en derecho. ¿Por qué? Porque precisamente lo que requiere la persona que está sujeta a un procedimiento o a un proceso penal es una asesoría técnica de alguien que haga valer sus derechos, y que lo auxilie en todas las etapas procesales y procedimentales que tiene lugar.

Por otro lado, creo que efectivamente la entrada en vigor del nuevo artículo 1º constitucional, hace casi dos años, en junio de dos mil

once, vino a traer un nuevo paradigma constitucional y la necesidad según mi entender que he sostenido en diversas ocasiones, una reinterpretación de toda la Constitución, de los textos constitucionales aun aquellos que no han variado, desde mi óptica personal, requieren una interpretación diferente a la luz de estos nuevos principios constitucionales. Pero de manera muy clara, el artículo 1° establece una interpretación conforme, y un principio pro persona, esta masa de derechos, de jerarquía constitucional por decisión del propio Constituyente, requieren –por un lado– que cualquier conflicto, por mandato de la Constitución, se interprete siempre de conformidad con los derechos humanos de la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional, viendo en todo momento aquello que beneficie en mayor medida los derechos de la persona. Este principio interpretativo no es optativo para los jueces, tenemos los juzgadores la obligación de interpretar así la Constitución, de interpretar así el orden jurídico mexicano, y de interpretar así todos los conflictos que se nos presenten; y si esto es así, –me parece– que es muy claro, como ya se ha señalado aquí, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8°, punto 2, incisos d) y e) establece un derecho a la defensa técnica: “d) Derecho del inculgado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculgado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.” Y estos principios, estos preceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha interpretado en el sentido de que se requiere una asesoría técnica, ya el Ministro José Ramón Cossío señaló puntualmente los precedentes aplicables al caso; de tal manera, que si tenemos esta obligación de interpretar conforme a estos derechos humanos y aquello que es en beneficio de la persona, me

parece claro –al menos para mí– que si tenemos esta disposición de la Convención Americana, debemos de preferirla, y las autoridades mexicanas están obligadas a que se cumpla con esta exigencia de una asesoría técnica, y creo que esto es así y sería así, incluso antes de la reforma del artículo 1º constitucional ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales son mínimos, las antes llamadas garantías individuales son mínimas, pero que no completan de manera absoluta o definitiva la protección de los particulares, si hay una norma que genera un beneficio mayor, se tiene que estar a esa norma, con independencia de que la Constitución –en este caso– no está estableciendo una prohibición, no está estableciendo una limitación, no está estableciendo una restricción, lo que está estableciendo es un mínimo y éste mínimo debe ser completado, incluso antes de la reforma al artículo 1º constitucional con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, me parece que después de la reforma, que sin duda creo que es aplicable porque es en beneficio del inculgado, procesado, indiciado, dependiendo del caso que nos ocupe, me parece que es plenamente aplicable, y toda vez que en el caso concreto se pretende satisfacer la defensa adecuada con la asesoría del padre del quejoso, creo que esto no satisface –en modo alguno– el estándar necesario de una defensa técnica que debe tener toda persona sujeta a una averiguación o a un proceso.

De tal manera, que yo, reiterando el criterio que he venido sosteniendo en otros precedentes en la Sala, votaré en contra del proyecto. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Arturo Zaldívar. Señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Gracias señor Ministro Presidente. Yo, en aras de no repetir lo ya mencionado por todos los señores Ministros que me han antecedido, yo también votaré en contra del proyecto, sustancialmente por las razones ya

mencionadas; a mí me parece que el derecho fundamental de defensa adecuada, mediante defensor, abarca forzosamente la etapa de la averiguación previa, yo considero que a raíz de la reforma al artículo 1° constitucional, el tilde en el artículo 20 constitucional se debe poner en “defensa adecuada” conforme al artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señor Ministro Luis María Aguilar Morales.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias señor Ministro Presidente. Yo sí estoy de acuerdo con el proyecto. Yo creo que independientemente de que convengo desde luego en la necesidad de que la defensa adecuada se haga a cargo de un abogado, de un experto en el conocimiento del derecho que favorezca todas las condiciones legales y recursivas a favor de la persona que representa. Desde luego que esto es un beneficio que además ya recogió nuestra Constitución expresamente, y también que este es un principio, y así lo veo, al que se debía aspirar desde hace tiempo, porque es una cuestión considerada como un derecho fundamental que estaba ya en los convenios internacionales, como el Pacto de San José, por ejemplo; sin embargo, considero que en este caso o en estos casos, porque podría haber infinidad de casos semejantes a estos, hay una disposición expresa de la Constitución. Para mí no se trata de la interpretación de una disposición constitucional atendiendo a las disposiciones o a las recomendaciones de un tratado internacional o de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; se trata de establecer si se va a cumplir, como lo señala la Constitución, con una disposición expresa, que no es una cuestión de interpretación, que señala o señalaba claramente que la defensa se podía hacer por un abogado o por persona de su confianza.

Esta es una disposición que para mí, surgió históricamente en el diecisiete, precisamente porque las personas que se sometían a procedimientos penales antes de esta época, eran verdaderamente ignoradas como parte del proceso; muchas veces ni siquiera se les llamaba para comparecer a su procedimiento y estaban relegadas en las prisiones sin que nadie pudiera defenderlos ni apoyarlos. Esto generó dos aspectos que se reflejaron en las discusiones del Constituyente: Una, que el detenido estuviera presente y se pudiera defender de las imputaciones que se le hacían y que pudiera estar en un primer término acompañado por gente de su confianza; en las discusiones también se habló de la necesidad de que hubiera un abogado y que si no lo tenía, el Estado tenía la obligación de señalarle uno, aparentemente durante las discusiones parecía que se estaba hablando de dos cosas vinculadas pero diferentes; la presencia del detenido acompañado de alguien de su confianza, y la defensa por un abogado que debía poder nombrar, inclusive decía que se le pusiera la lista de abogados para que eligiera uno o los que él quisiera para que lo defendieran y pudiera llevar el proceso una gente especializada.

Finalmente, la redacción de la disposición constitucional terminó unificando las dos cuestiones y señaló que la defensa adecuada o la defensa de la persona debía ser por abogado o por gente de su confianza, y que si no tenía abogado se le nombraría uno por parte del Estado.

Esta disposición constitucional que atendió precisamente a las circunstancias históricas en que estaba el país cuando el Constituyente se reunió, en la que encontrar abogados no era lo más fácil o común, e inclusive las primeras disposiciones constitucionales hablaban de que la falta de pago de honorarios a los abogados no iba a ser motivo de mayor sanción, obedeció precisamente a esta cuestión de la imposibilidad material de

encontrar suficientes expertos en derecho, abogados que pudieran defender a la gente, y con la intención de paliar esta defensa en soledad del detenido, se autorizó que fuera una persona de su confianza la que lo hiciera.

Esta disposición “estuvo vigente” hasta que se hizo la reforma de 2008, y aun así estuvo vigente –lo pongo entre comillas– porque es esta disposición que es expresa de nuestra Constitución, que no da lugar a mayor interpretación sino a su cumplimiento, aun cuando se compaginara con el convenio internacional, con los principios de derecho internacional en esta materia, debería o debe –desde mi punto de vista así lo he sostenido en otros muchos asuntos– cumplirse y acatarse, porque el que no se haga así es establecer que una disposición constitucional no puede cumplirse o no debe cumplirse por razones de cualquier tipo, de convenios, de sentencias internacionales o de una pretendida interpretación que yo ni siquiera puedo entender cuando la disposición es clarísima y es expresa.

Esta disposición además tiene la circunstancia de que conforme al artículo Transitorio de la reforma de 2008, señaló –eso atendiendo a la entrada en vigor– los artículos Primero y Segundo Transitorios de la reforma de 2008 –del dieciocho de junio de dos mil ocho– señalan: “Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos Transitorios siguientes: –con excepción– Segundo, primer párrafo: El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente.

Aquí yo no encuentro ninguna excepción a la entrada en vigor del artículo 20 sino hasta que se de esta condición establecida por el propio Constituyente, de tal modo que seguiría o seguirá aplicándose esta disposición anterior, la que establecía la posibilidad de que una persona de confianza asesorara al procesado hasta que no entrara en vigor conforme a lo que ya determinamos también aquí en este Pleno, que debía darse un aviso de las lecturas correspondientes de que el sistema ya está establecido y funcionando; de tal manera que esta disposición expresa de la Constitución no da lugar a ninguna otra interpretación.

No puedo estar de acuerdo y así lo he manifestado en muchas otras ocasiones, en que una interpretación con base en un convenio pueda simple y sencillamente hacer que una disposición constitucional no se aplique, como si las disposiciones constitucionales no fueran las normas máximas supremas de este país que dan origen inclusive a todo el marco legal que nos rige, incluyendo los propios tratados internacionales; no en balde los tratados internacionales tienen su origen, su legitimidad, en la propia Constitución y tan es así que en el artículo 105 de nuestra Constitución, estos tratados internacionales pueden ser ponderados, valorados y analizados conforme a las propias disposiciones constitucionales. ¿Por qué? Porque en este régimen, en este sistema de nuestra Constitución, aun los tratados internacionales están sometidos a las disposiciones constitucionales.

Para mí, la interpretación que genera una falta de adecuación o hacer a un lado una disposición expresa de la Constitución, me parece que es inaplicable, que no es posible, porque la Constitución si bien es cierto que puede ser complementada o puede ser interpretada de alguna manera con estos principios, es

claro que cuando hay una disposición expresa que no tiene excepción en la propia Constitución como ahora lo establece el artículo 1º de la Constitución, no tiene más que acatarse, nada por sobre la Constitución.

La Constitución es la que determina una actuación y ésta es la que se debe cumplir, y en el efecto práctico —que todavía no tratamos pero que ya el Ministro Valls, por ejemplo, adelantó su propuesta— yo estaré porque se haga una reposición del procedimiento, en su caso, para poder facilitar las cosas, suponiendo que se encontrara la votación suficiente en ese sentido; yo creo que no, y creo que debe negarse el amparo porque se cumplió fiel y completamente con la disposición constitucional que permitía esto, que tuvo su origen histórico en las necesidades de nuestro país que imperaban hasta entonces sin desconocer que el nuevo sistema en el que se exige que un experto en derecho sea el que asesore a la persona que está sometida a un proceso penal, sea desde luego lo mejor.

Eso es inclusive lo que —insisto— ya recoge nuestra Constitución y creo que desde luego se ha avanzado en ese aspecto, pero desconocer una disposición expresa de la Constitución diciendo que se trata de una simple interpretación, definitivamente no puedo convenir con ello, por eso en principio y en términos generales estoy de acuerdo con la propuesta del señor Ministro Pardo, de negar el amparo en este asunto.

Porque además, finalmente, estas cuestiones de aplicación, como ya señalaba el Ministro Zaldívar, no sólo derivan de esta reforma al artículo 1º constitucional, según él mismo nos dice, entonces tendríamos que atender a todos los casos que se han generado desde que se firmó el Convenio de San José en los años 60's para acá, para revisar si en todos los procesos se cumplió con esa

disposición ignorando la disposición constitucional que lo permitía expresamente. Muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Luis María Aguilar, para una aclaración antes de darle la palabra al señor Ministro Valls que la ha solicitado, una aclaración del Ministro Zaldívar, anotamos a la señora Ministra.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente, me parece que no estamos en presencia de desconocer la Constitución, de dejar de aplicar la Constitución que expresamente ordena algo y estamos simplemente haciéndola a un lado, el artículo 1º constitucional, también es Constitución y es el que nos ordena cómo tenemos que interpretar la Constitución y todo el orden jurídico mexicano.

Y por otro lado, incluso en el esquema anterior, por eso decía, las garantías individuales eran mínimas, aquí no hay un mandato, no hay una restricción, no hay una prohibición, es un mínimo, si otra norma del sistema jurídico mexicano como lo eran los tratados internacionales desde antes de la reforma al artículo 1º, daba una garantía mayor, los jueces tenían que haber preferido esa garantía.

Creo que ese es el aspecto y que si hubiera algunas consecuencias prácticas pues me parece que no serían suficientes para estar por encima de la Constitución porque la interpretación que estamos haciendo es acorde a la Constitución, la Constitución es la que establecía un mínimo en los derechos fundamentales y la Constitución es la que establece en el artículo 1º una interpretación conforme y un principio pro persona.

Entonces, no creo que estemos en el supuesto de desacatar una norma constitucional porque reitero, no hay una prohibición ni hay

una restricción, ese sería otro debate, simplemente hay un mínimo que debe ser interpretado armónicamente. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Zaldívar. Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente. Ya el señor Ministro Aguilar, aquí hablando en corto como se dice coloquialmente, me había hecho este señalamiento que ahora ha mencionado ante todos ustedes, pero yo tengo esta interpretación también, el sistema penal acusatorio, el artículo 20 no está directamente relacionado ni únicamente relacionado en el aspecto de defensa adecuada con el sistema penal acusatorio, no lo podríamos encuadrar este artículo 20 en el Segundo Transitorio de la reforma de 2008, porque la defensa adecuada viene desde antes y es propio de todo sistema penal, no del inquisitivo o del acusatorio, ya desde el sistema penal inquisitivo, que todavía rige, tenemos el sistema de defensa penal adecuado.

Por lo tanto, yo considero que le es aplicable al artículo 20 en este aspecto de defensa penal adecuada, el Primero Transitorio de la reforma constitucional de 2008, que se refiere precisamente a lo que ya estaba, a lo general; y el Segundo Transitorio ya es específico, si me permite la expresión, a lo nuevo, al sistema penal acusatorio. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Valls. Señora Ministra Luna Ramos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente. Yo me quiero manifestar de acuerdo con el proyecto del señor Ministro

Mario Pardo Rebolledo y quiero dar las razones por las cuales estoy de acuerdo con su proyecto.

Como se ha mencionado desde el principio cuando se presentó este asunto, se decía que se trataba de un robo y homicidio calificado, por qué razón, porque dos personas que estaban bebiendo se subieron a un taxi, quisieron asaltar al taxista, se lo llevaron al despoblado, le robaron ¡trescientos pesos! Trescientos pesos y lo mataron, lo mataron.

Esto para mí es muy importante, lo mataron y con base en esto se les inicia un procedimiento, un procedimiento en el que se les dice que con base en lo establecido en la Constitución y en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, se le dice en el momento en que se le toma la declaración ministerial, que tiene derecho a la defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza. Entonces, determina señalar como quien le asista precisamente a su padre, al coacusado que nos ocupa en este juicio de amparo; entonces designa a su padre. Es condenado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de justicia del Estado y una vez que es condenado a determinados años de prisión va al juicio de amparo, cuando esta sentencia ya es definitiva.

En el juicio de amparo lo que aduce es precisamente que hay una inadecuada defensa, que porque en su opinión no podía haberlo asistido en la declaración ministerial su padre, que porque tenía que haberlo asistido un abogado.

El Tribunal Colegiado, déjenme decirles, es esta la sentencia, y hace una interpretación que no se las voy a leer para no cansarlos, pero que valdría la pena que sí se le diera una revisadita, hace una interpretación, en mi opinión excelente, e incluso determinando qué se entiende o no por “abogado” aun en ese caso, pero finalmente acaba determinando que se cumplió con el proceso adecuado y que una vez cumplido el proceso adecuado, bueno, hace el análisis

de las pruebas que se desahogan, y desahogadas estas pruebas dice: “Es culpable y por tanto estuvo correctamente dictada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y niega el amparo”.

Se vienen al recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aduciendo que hay un problema de interpretación del artículo 20 constitucional en su fracción IX. El recurso de revisión es admitido, se manda a la Primera Sala, y de ahí la Primera Sala determina que este asunto se venga al Pleno.

¿Cuál es el problema que se nos presenta aquí de manera primordial? Se nos presenta lo siguiente: ¿Qué es lo que decía el artículo 20 constitucional vigente en el momento de los hechos? El artículo 20 constitucional en su apartado “A”, fracción IX decía: “Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución, y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza”, esto dice el artículo 20 constitucional en su fracción anterior; pero además el Código de Procedimientos Penales del Estado del que se hace cargo la sentencia del Tribunal Colegiado dice: “Artículo 28. Asistencia del defensor. Toda persona que haya de rendir declaración en los casos de los artículos 23 y 24 de este ordenamiento, tendrá derecho a hacerlo asistida por un abogado nombrado por él o por persona de su confianza”, no dice un abogado y persona de su confianza, puede ser indistintamente uno u otro, “los cuales no podrán inducir las respuestas del asistido”.

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, publicado con posterioridad a los hechos que fue el tres de febrero de dos mil doce dice: Nombramiento del defensor. Desde su detención o cuando el imputado se encuentre presente, haber sido citado y antes de que declare sobre los hechos, se le requerirá el nombramiento de un abogado, si no lo tuviera, para que lo asista y se le informará que puede exigir su presencia y consultar con él todo lo relacionado a su defensa.

Este artículo se reformó como ven, y ahora ya se le permite, o se le dice que debe de ser abogado, pero el artículo vigente en el momento de los hechos, vigente con el artículo 20, fracción IX, inciso a), de la Constitución, decía que era por un abogado nombrado por él o por persona de su confianza, pero además esto lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis, la Tesis 9/2006, donde dijeron: “DECLARACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE REQUISITO LEGAL QUE LA PERSONA QUE ASISTA A LOS INCULPADOS EN SU DESAHOGO SEA UN LICENCIADO EN DERECHO”.

Esta tesis está publicada en el Semanario Judicial de la Federación, no tiene anotación alguna de que haya perdido vigencia, no tiene ninguna anotación, la tesis es jurisprudencia, y por tanto, obligatoria.

Otra de las situaciones importantes es: Se ha dicho aquí y el proyecto del señor Ministro Pardo Rebolledo lo que está estableciendo es: ¿Cuál es el texto que vamos aplicar del artículo 20 constitucional, el artículo anterior a la reforma de dos mil ocho, o el artículo posterior a la reforma? ¿Qué dice el artículo posterior a la reforma? Dice: “De los derechos de toda persona imputada. Tendrá derecho a una defensa adecuada, por abogado, el cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención”.

Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nuevo texto del artículo 20 constitucional sí está obligando a que se estime como defensa adecuada el que esté asistido por un abogado que puede designar libremente desde el momento de su detención, situación que no establecía el texto anterior del artículo 20 constitucional. Vuelvo a leer, dice: “Desde el inicio de su proceso –decía el artículo 20 anterior– será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí,

por abogado, o por persona de su confianza”. Esto ante el agente del Ministerio Público.

Entonces, por eso el proyecto del señor Ministro Pardo Rebolledo parte primero de la determinación. ¿Cuál es el texto que vamos aplicar, el artículo 20 anterior o el artículo 20 posterior; es decir, a la reforma de dos mil ocho? El artículo 20 anterior era el que estaba vigente en el momento en que se llevaron a cabo los hechos. Pero recuerden ustedes que aquí, en este Pleno, resolvimos por mayoría de votos la Contradicción de Tesis 36/2012. ¿Qué es lo que nos dice la Contradicción de Tesis 36/2012? Nos dice cómo vamos a tomar en consideración la entrada en vigor de este nuevo sistema penal acusatorio.

¿Qué fue lo que se discutió entonces? Recuerden ustedes, están los dos sistemas: El sistema penal anterior y el sistema penal acusatorio vigente a partir de dos mil ocho. ¿Y qué se dijo cuando se discutió esta contradicción de tesis? Hay dos requisitos, es cierto que el artículo Primero Transitorio de esta reforma nos dice que ya entró en vigor al día siguiente, pero el artículo Segundo Transitorio nos marca dos requisitos muy importantes para tener por entrada en vigor la reforma constitucional correspondiente.

El artículo Transitorio lo que nos dice es: Para que se estime que va a entrar en vigor la reforma de dos mil ocho, el nuevo sistema penal acusatorio son necesarias dos cuestiones importantes. La primera. Que cada uno de los Congresos locales o el Distrito Federal, hagan las reformas y las adecuaciones correspondientes a sus códigos penales y de procedimientos y de leyes, que en un momento dado se encuentran involucradas en el proceso penal; entonces, primero que nada que se hagan las reformas y se hagan las adecuaciones al nuevo sistema penal acusatorio.

Y la segunda es: Que los Congresos locales, tanto del Distrito Federal como de los Estados hagan la declaratoria correspondiente

de entrada en vigor de la reforma constitucional; y además, que podían ellos libremente determinar cómo se va entrar en vigor por estas reformas: Si va a ser por delito, si va a ser por región, que esto quedaba al libre arbitrio de los Congresos locales.

Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Estado de Michoacán? En el Estado de Michoacán no se ha hecho ninguna adaptación en su legislación ordinaria a la forma constitucional; por una parte, y por otra, tampoco se ha hecho la declaratoria específica del Congreso local para decir que ya entró en vigor el nuevo artículo 20 de la Constitución, que está supeditado específicamente al Transitorio del Decreto de reforma constitucional correspondiente. Pero además, esto ya fue motivo de interpretación de este Pleno, está la Contradicción de Tesis 36/2012, la tesis aprobada es precisamente la que nos dice que el sistema penal acusatorio tendrá que entrar en vigor hasta que las Legislaturas locales hayan cumplido con estos dos requisitos: que hayan hecho la declaratoria, y hayan hecho sus adecuaciones. Vuelvo a repetir, Michoacán no ha hecho ni declaratoria, ni ha hecho adecuación alguna de su legislación local a la reforma constitucional; y aparte, hay otra tesis de la Primera Sala que también interpretó esto que dice: “SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ELUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO”. Esta tesis es de la Primera Sala, y es una tesis que sale el tres de diciembre de dos mil ocho; es decir, con posterioridad a que se llevó a cabo la reforma constitucional del sistema penal acusatorio; es decir, así interpreta la Primera Sala cuándo tiene que entrar en vigor, pero otra de las circunstancias que se ha dicho: no, tiene que tomarse en

consideración porque en la reforma constitucional del artículo 1º, se establece el principio pro homine, y entonces debemos aplicar el principio pro homine, ¡por supuesto! yo lo entiendo, el artículo 1º constitucional lo está estableciendo, ¿pero siempre vamos a aplicar el principio pro homine a rajatabla? Lo vamos a aplicar cuando sea viable, cuando el principio pro homine en realidad tenga esa viabilidad, por qué razón en este caso en mi opinión no es viable, porque en este caso si vamos a aplicarlo en este asunto o en los subsecuentes que vienen, hay que aplicárselos a todos. Yo creo que conforme al sistema penal acusatorio anterior, habría que ver de los miles de procedimientos que se han llevado a cabo, a cuántos ante el Ministerio Público se les tuvo como defensor a una abogado, y no una persona de su confianza que no era abogado; entonces ¡A todos! A todos se les tendría que aplicar el mismo rasero. Ahora, por qué no es viable aplicar el sistema posterior a hechos anteriores, porque el sistema es totalmente diferente, estamos hablando de un sistema penal novedoso, un sistema penal que implica cuestiones, la señora Ministra cuando leyó su dictamen lo dijo muy claramente, cuáles eran los principios, las razones del nuevo sistema penal acusatorio que es totalmente distinto al que en este momento todavía está en vigor en muchos partes de la República, por eso se necesita para poder aplicar el nuevo artículo 20, que las legislaciones locales estén acordes al nuevo sistema, si las legislaciones locales no están acordes al nuevo sistema ni se ha hecho la declaratoria, no podemos aplicarlo, por qué, porque se trata de cuestiones totalmente diferentes. Ahora, se ha dicho, es que el artículo 1º nos obliga a la aplicación del principio pro homine y a la aplicación de los tratados internaciones, sí, yo coincido plenamente con eso, el artículo 1º constitucional nos dice que debemos respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internaciones; desde luego, este tratado internacional que se hace valer en este asunto, está desde muchísimo entes, no es un tratado que se haya emitido con

posterioridad al artículo 1° constitucional, pero recuerden ustedes una situación, estamos en amparo en revisión, y en amparo en revisión, el artículo 107 de la Constitución, recién reformado, no nos ha dicho que la procedencia del amparo directo en revisión permita el análisis de convencionalidad. Leo la fracción IX del artículo 107, dice: “En materia de amparo directo, procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia”. En ningún momento nos dice el artículo 107, que es motivo de procedencia de este recurso, el análisis de convencionalidad; entonces, sin dejar de reconocer que a partir de la reforma del artículo 107 estamos constitucionalmente obligados a hacer control de convencionalidad, esto no quiere decir que nos dé lugar a la promoción del amparo en revisión, porque no es problema de legalidad, entonces, no siendo la aplicación de convencionalidad un problema de constitucionalidad, no se abre para la procedencia del amparo en revisión, y además les recuerdo, ya votamos el capítulo de procedencia de este asunto, y en el capítulo de procedencia de este asunto, se maneja de manera específica por el señor Ministro ponente, que es procedente, porque se está haciendo la interpretación de un precepto de la Constitución, no nos dice que es procedente porque haya que analizar un problema de convencionalidad, y yo creo que eso es importante señalarlo y ya está votado.

Por otra parte, se ha señalado también, que debemos aplicar las cuestiones de convencionalidad, porque tenemos algún precedente, donde mayoritariamente así se determinó; yo coincido plenamente con que eso así es, pero este precedente al que se ha hecho alusión, no es un precedente que haya constituido

jurisprudencia, es un precedente aislado y como tal es orientador, pero no es obligatorio, como sí lo es la Contradicción de Tesis 36/2012, donde dijimos cuáles eran los requisitos para aplicar aquellos artículos de la reforma constitucional, que han entrado en vigor y de qué forma se estima que ellos han entrado en vigor; esa Contradicción de Tesis sí nos obliga, sí nos obliga porque es una Contradicción de Tesis de este Pleno, y yo les quisiera recordar que podemos o no haber votado a favor, porque fue una Contradicción de Tesis que salió por mayoría, pero la jurisprudencia de Pleno nos obliga, nos obliga a ser consistentes a que en un momento dado ya se interpretó de qué manera debe estimarse va a entrar en vigor este sistema de reforma constitucional. Yo respeto muchísimo la opinión de los señores Ministros que votaron en contra, pero hoy por hoy es jurisprudencia y es obligatoria, y nos obliga a este Pleno, pero además, la cuestión de la jurisprudencia es que si no ha sido de alguna manera interrumpida o sustituida conforme al nuevo sistema de la nueva Ley de Amparo, pues nos sigue obligando, está perfectamente establecida, y por tanto, el proyecto del señor Ministro Mario Pardo Rebolledo, con base en esa jurisprudencia, precisamente determina que lo que tenemos que aplicar es precisamente el párrafo del artículo 20, anterior a la reforma de dos mil ocho.

Creo que la consistencia en un Tribunal Constitucional, en mi opinión es muy importante, es lo que hace predecible, y es lo que da confianza, certeza y seguridad jurídica; podemos en un momento dado estar o no de acuerdo con alguna decisión, pero si esa decisión es obligatoria, podemos salvar criterio, pero la tenemos que aplicar, y esa es la que aplica el proyecto que está presentando el señor Ministro Pardo Rebolledo.

Por esas razones a mí me parece que el proyecto es correcto, yo haría algunas salvedades respecto de algunas inoperancias que el

señor Ministro Pardo Rebolledo está haciendo respecto de algunos conceptos de violación, porque les ha dado el carácter de novedosos, creo yo que en materia penal no podríamos decir necesariamente ese tipo de cosas, porque existe una suplencia de la queja demasiado amplia, y por tanto, no podríamos hablar de criterios novedosos; sin embargo, creo que podría salvarse esta situación cuando estamos en presencia de conceptos de violación más bien relacionados con legalidad o convencionalidad, que no son precisamente materia de análisis de un recurso de revisión en juicio de amparo directo, pero fuera de éstos, que son matices realmente sin importancia y sin relevancia, yo coincido plenamente con el proyecto presentado por el señor Ministro Mario Pardo Rebolledo, porque aplica una jurisprudencia de este Pleno en cuanto a la forma en que tiene que establecerse la interpretación y la aplicación sobre todo de la reforma constitucional que fue votada y aprobada por este Pleno y que determinamos que entra de manera paulatina, a través de que cada uno de los Estados vaya realizando las reformas correspondientes, y en un momento dado, establezca la declaratoria respectiva, situación que en el caso de Michoacán no ha sucedido. Por estas razones, señor Presidente, yo me manifiesto a favor del proyecto del señor Ministro Pardo Rebolledo, muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Al contrario, a usted señora Ministra. Voy a dar el uso de la palabra para efectos de una aclaración que nos pudiera hacer la señora Ministra Sánchez Cordero, antes de levantar la sesión pública ordinaria, convocarlos a la que tendrá verificativo el día de mañana, a la misma hora, aquí en este lugar y a su vez, a la sesión privada de carácter administrativo, que se verificará inmediatamente después de que termine esta sesión. Señora Ministra, disculpe.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Gracias señor Ministro Presidente. Para mí es muy importante hacer uso de la palabra porque pareciera que estamos desacatando la jurisprudencia que ha hecho tanto hincapié la señora Ministra, precisamente en mi intervención, yo distinguí con mucha claridad cuáles son los derechos fundamentales de esta reforma y cuáles son los derechos procesales adjetivos.

Por otra parte, es como si dijéramos: vámonos a cualquier otro derecho fundamental que contempla hoy la reforma en este artículo 20, apartado B, en todos sus incisos ¿A que se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad, a declarar o a guardar silencio, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o del juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten? Yo por eso, no creo sinceramente y con todo respeto, que esta jurisprudencia, en este caso, la estuviéramos desacatando o nos estuviéramos apartando de ella. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señora Ministra. El debate continuará. Señora Ministra Luna Ramos, una aclaración.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Nada más una muy pequeña aclaración, señor Presidente. Desde luego, con el absoluto respeto a los criterios que ya se han manifestado, por eso centré, el proyecto se está basando fundamentalmente en determinar cuál vamos a aplicar, el texto del artículo 20, anterior a la reforma de dos mil ocho, o el texto del artículo 20, posterior. En el texto del artículo 20 anterior, no era necesario que fuera abogado, podía ser por sí o por persona de su confianza y en el nuevo texto sí necesariamente debe tener un abogado, entonces, por eso el planteamiento es ¿cuál de los dos textos aplicamos? Pues aplicamos de acuerdo a la Contradicción 36/2012, el texto anterior, porque es el que esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que debía de entrar en vigor, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos del Segundo Transitorio del Decreto constitucional correspondiente. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señora Ministra. Continuará el debate pues el día de mañana en este lugar, en la forma que hemos convocado. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 13:10 HORAS)